**EDICIÓN
ESPECIAL**

No.98

HONDURAS: USO DE UNA AGENDA DE SEGURIDAD IMPORTADA

diciembre 2013

Elliot Sucari

CEDOH
Centro de Documentación de Honduras

Documentos de Análisis

Boletín Especial
diciembre 2013 **No.98**

CONTENIDO

<i>Presentación CEDOH</i>	3
Resumen	4
A. Introducción	4
B. Visiones opuestas	4
C. Fuerzas Armadas	5
D. Seis políticas de lucha	6
E. Hipótesis de conflicto: la visión norteamericana	8
F. Continuidades en política exterior	8
G. Comentario final	9
Bibliografía.....	11

Honduras: uso de una agenda de seguridad importada

Las ideas y opiniones expuestas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión de los cooperantes.

Esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente, en cualquier forma o por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente.

Edición y diagramación:

Centro de Documentación de Honduras, CEDOH

Impresión:

Impresos Cerrato, diciembre 2013

*P*resentación

***E**l Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) pone a disposición de sus lectores este boletín de análisis dedicado al tema: HONDURAS: USO DE UNA AGENDA DE SEGURIDAD IMPORTADA, del autor Elliot Sucari, quién se dedica a estudiar detalladamente la estructuración de una agenda de seguridad concentrada en el combate al narcotráfico en una especie de alineamiento nacional con la política exterior de Estados Unidos.*

El autor realiza un repaso de lo que acontece en el país desde el golpe de Estado de 2009 y analiza diversos momentos en los cuales van coincidiendo las agendas de seguridad, específicamente las relacionadas con el combate a las drogas y la utilización de militares y policías en su ejecución.

El CEDOH publica este trabajo como un aporte de calidad al debate sobre el tema de la seguridad y violencia en nuestro país, el papel que debe jugar el Estado y, en particular, el papel de los militares en el combate al narcotráfico y las repercusiones que esto puede traer para el país; sin embargo, las ideas que aquí se exponen son exclusivas del autor y no comprometen al CEDOH como institución.

Centro de Documentación de Honduras

HONDURAS: USO DE UNA AGENDA DE SEGURIDAD IMPORTADA

Elliot Sucari¹

Resumen

El golpe de Estado hondureño y su eventual resolución en el 2009 tuvo un efecto determinante para la subregión. No solo porque implicó un cambio inconstitucional de gobierno, sino también por la adopción de una visión de seguridad completamente diferente a la que se estaba aplicando antes de abril del 2009. Seis momentos muestran la evolución hacia una hipótesis de conflicto alineada con la política exterior estadounidense. El siguiente artículo se concentrará entonces en cuatro aspectos. El primero analizará el rol de las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado. El segundo ilustrará estos seis momentos que definen la nueva agenda de seguridad. El tercero examinará cómo los espacios de poder que ocuparon los distintos actores (en especial las FFAA) luego del golpe de Estado, son cruciales para explicar las presentes acciones en materia de seguridad. El cuarto analizará cómo en materia de seguridad los gobiernos de Obama y de Bush presentan más continuidades que rupturas.

Palabras clave: Agenda de seguridad – Agenda militarizada – Securitización – Golpe de Estado Honduras 2009 – Fuerzas Armadas – Barack Obama – George W. Bush – Manuel Zelaya – Presidente Lobo – Política exterior - Guerra contra las drogas – América Latina.

A. Introducción

El golpe de Estado en Honduras y su eventual resolución tuvo un efecto determinante en América Latina. El 28 de junio del 2009 se

¹ Licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires. Área de Desarrollo Académico, de la Fundación Argentina Ciudadana. elliott@sucari.com

produjo un golpe de estado en donde las Fuerzas Armadas hondureñas, como producto de una amplia coalición palaciega, “*destituyeron*” y expulsaron al presidente Manuel Zelaya (Manaut & Diamint, 2010: 148). El 30 de noviembre, después de unos meses de interinato del presidente del congreso Roberto Micheletti, el líder del partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, fue electo presidente con el 56% del voto popular. El golpe institucional significó un cambio inconstitucional de gobierno y estableció una visión de seguridad completamente diferente².

Honduras desde la última década transita una situación preocupante en cuanto a su seguridad interna. La escalada y proliferación del narcotráfico le han convertido en el más violento del mundo³. El problema es indiscutible: el 95% de la cocaína que entra a Estados Unidos desde Sudamérica pasa por el corredor centroamericano (Beittel, 2011). De este 95%, el 80% primero se distribuye y comercializa por Centroamérica antes de ingresar a México. Y el 79% de todos los vuelos traficantes de cocaína que vuelan desde Sudamérica aterrizan en Honduras según los estudios del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, en 2012. Sus implicancias y consecuencias hacia la región son evidentes.

Este artículo ilustrará seis políticas reactivas a esta situación, que indican la transición desde una política de seguridad matizada por la agenda del ALBA, hacia una política de seguridad regida por una hipótesis de conflicto estadounidense. Estas seis políticas que se fueron estableciendo entre 2010 y 2012, demuestran que la política de seguridad de Honduras post golpe se inclinó hacia la *guerra contra las drogas*.

B. Visiones opuestas

Para poder comprender la mutación de la política de seguridad hondureña a partir del 2009, es necesario mencionar los dos paradigmas que hoy día abordan la complejidad del narcotráfico.

² A diferencia de los golpes de Estado tradicionales de América Latina, el golpe de Estado hondureño se legitima con la Corte Suprema y es diseñado por políticos opositores al gobierno de Manuel Zelaya.

³ Honduras tiene una tasa de homicidio de 86/100,000 habitantes.

Por un lado la visión estadounidense conocida como la *guerra contra las drogas*, ha adoptado una nomenclatura en donde se ha “*securitizado*” el concepto del narcotráfico y las medidas utilizadas para responder a dichos problemas. Se “*ha focalizado primariamente en el combate contra la provisión y el transporte de narcóticos, (...) ha sido esencialmente coercitiva*” y “*se ha concentrado en la periferia*” (Tokatlian, 2009: 26). Como indica Craig Deare, Estados Unidos ha impuesto una agenda híper-militarizada en la región, al interpretar que las soluciones a los problemas del creciente narcotráfico en los últimos años deben abordarse a través de un papel preponderante de las Fuerzas Armadas (Deare, 2008: 25-28). Sus políticas más características son: la erradicación de cultivos ilícitos, el desmantelamiento de los grupos narcotraficantes, la militarización de la lucha contra las drogas, la criminalización de la cadena ligada a la producción, negocio y consumo de las drogas, y el rechazo a cualquier iniciativa que busque legalizar las drogas (Tokatlian, 2009: 13-14).

La visión norteamericana se contrapone al enfoque europeo conocido como el enfoque de *reducción de daños*. La misma se caracteriza por sus objetivos éticos y liberales, haciendo hincapié en las condiciones sociales de los países productores y traficantes y reconoce la responsabilidad compartida en el tráfico de drogas. Esta política orienta su énfasis hacia la reducción de la demanda en vez de la oferta (Briscoe, 2009: 297-302).

C. Fuerzas Armadas

Durante su mandato Manuel Zelaya, el ex presidente hondureño, encaminó un gobierno plagado de retóricas populistas al impulsar una concepción nacionalista a los problemas estructurales del país. Implementando ciertos rasgos de caudillo *-desde la utilización del sombrero campesino hasta el uso de un lenguaje llano y popular-* alineó a Honduras al ALBA (el bloque comercial y político liderado por Hugo Chávez que incluye a Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua). De la misma forma impulsó una reforma constitucional que, pese a la negativa del Congreso y el Poder Judicial, movilizó a una multitud de seguidores hacia una base aérea militar para apoderarse de las boletas que iban a decidir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en la elecciones generales de noviembre del 2009.

Estas decisiones generaron ciertas divisiones en el frente político interno que llevaron a que sus opositores políticos, junto con las Fuerzas Armadas, en principio por orden de la Corte Suprema, destituyeran al presidente.

Las Fuerzas Armadas no estuvieron dispuestas a tomar ciertos espacios de gestión pública para llevar a cabo las medidas de Manuel Zelaya. El ahora ex presidente, intentó que las Fuerzas Armadas apoyen el proceso de la Encuesta Popular para instalar una cuarta urna en las elecciones. Como afirma el coronel de las Fuerzas Armadas hondureñas, Herberth Bayardo Inestroza, “*el señor presidente estaba utilizando a las Fuerzas Armadas*” para llevar la cuarta urna en las elecciones (Inestroza, 2009) como una herramienta política. Frente a esta negativa quedó en claro la poca capacidad de control que tuvo Manuel Zelaya sobre las Fuerzas Armadas.

El 28 de junio del 2009 las Fuerzas Armadas se comportaron como un actor unificado. Queda en evidencia cuando frente a la negativa de ser utilizadas para cumplir con una orden de gestión pública, Zelaya insta la renuncia del Jefe de Estado Mayor y recibe la negativa de los demás oficiales para ocupar su cargo (Inestroza, 2009). Esta unidad presente en las Fuerzas Armadas hondureñas es una de las causas que posibilitó que el golpe de Estado se haya podido llevar a cabo y haya perdurado en el tiempo.

La participación de las Fuerzas Armadas en el golpe “*ni fue gratuita ni simplemente coyuntural*” (Meza, 2010), teniendo como finalidad aumentar sus cuotas de influencia. A través de su accionar, recuperaron viejas prorratas de poder perdido, adquirieron otras nuevas, y ampliaron las que habían logrado mantener a lo largo de la transición democrática. Salieron beneficiados pero no se quedaron administrando el Estado (Meza, 2010). En clave de Stepan (Stepan, 1988), las Fuerzas Armadas lograron mantener y consolidar ciertos privilegios que los colocaron en el centro de la actividad política. Luego de la gradual transición democrática que inicia en 1980, los militares lograron conservar un alto grado de prerrogativas e influencia en la toma de decisiones.

Incluso, se puede interpretar que pretendían mantenerse en la escena política, tal como lo dilucida el cable entre el Departamento de Estado y la Embajada americana en Tegucigalpa, que cuenta de la negociación entre el Presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, y el Embajador norteamericano Hugo Llorens. El Embajador le

solicita que remueva ciertos funcionarios políticos del nuevo gobierno, para asegurarse la creación de un gobierno que transite hacia la democracia. Puntualmente demanda la destitución de aquellos que gestaron el golpe, y en especial la expulsión del Jefe del Estado Mayor Conjunto Vásquez y el Jefe del Ejército García Padgett (Embajada EE.UU. en Tegucigalpa, Cable N°10TEGUCIGALPA143). Llorens afirma que es fundamental que haya un control civil sobre las Fuerzas Armadas para la reconstrucción democrática de Honduras.

La coalición que participó del golpe, compuesta mayoritariamente por las Fuerzas Armadas, proyectó ocupar el espacio político. La presencia del Departamento de Estado *—que en la búsqueda de una resolución consensuada, actuó como mediador entre ambas facciones enfrentadas, ejerció presiones para reanudar el orden democrático y se alineó a la postura de la OEA—* enfatiza la necesidad de contrarrestar y debilitar el poder de las Fuerzas Armadas y sus prerrogativas en el plano doméstico. La exigencia del Embajador americano también recalca los espacios de poder que nuevamente comenzaron a ocupar las Fuerzas Armadas en el gobierno hondureño y su intención de permanecer en la escena política.

Por último, el hecho de que las Fuerzas Armadas hayan cometido un acto ilegal en el cual se excedieron en las capacidades otorgadas por la Constitución (Inestroza, 2009; y Embajada EE.UU. en Tegucigalpa, Cable N°10TEGUCIGALPA16), indica la falta de una transición democrática finalizada. Como lo define Juan J. Linz, *“el hecho de que ciertas instituciones [las Fuerzas Armadas] (...) pueden tratar de ejercer el veto (...) puede llegar a considerar esas democracias como no consolidadas”* (Linz, 1989: 29): el golpe es un indicador preciso de la poca robustez democrática. En este sentido, la falta de una re-estructuración en torno a los espacios ocupados por las Fuerzas Armadas indica cómo han mantenido y capitalizado la impronta en la toma de decisiones luego del golpe. *“La prescindencia política no es una cualidad de los militares hondureños”* (Manaut & Diamint, 2010).

D. Seis políticas de lucha

Si bien el golpe de Estado se produjo por variables propiamente endógenas del modelo hondureño⁴ es válido reconocer que, por la distancia que tomó Zelaya de las políticas de Washington, los resultados del golpe no fue visto con malos ojos por Estados Unidos (Sucari, 2011: 17).

La relación con Estados Unidos ya se venía deteriorando. En Naciones Unidas, Honduras ostentaba el voto más diferenciado con Estados Unidos de los últimos años (Cable de la Embajada EE.UU. en Tegucigalpa: 08TEGUCIGALPA459, 2008). Asimismo, existían evidencias que el gobierno mantenía vínculos estrechos con la delincuencia organizada según fuentes de información estadounidense (Cable de la embajada EE.UU. en Tegucigalpa: 08TEGUCIGALPA89, 2008). El gobierno se alineó con Venezuela en materia de seguridad nacional, específicamente al no considerar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como un grupo terrorista, a cambio de concesiones de Petrocaribe *-como lo afirman las comunicaciones internas estadounidenses entre la embajada y la Secretaria de Estado (Cable de la embajada EE.UU. en Tegucigalpa: 08TEGUCIGALPA89, 2008)-*. La destitución de Zelaya y la eventual reconfiguración interna abrió la puerta para aplicar un enfoque importado a un problema subregional.

Como hemos insinuado, el Departamento de Estado ocupó un lugar primordial en las negociaciones y resolución del conflicto hondureño. Logró cumplir su objetivo dado que las dos principales facciones hondureñas se sentaron a negociar y firmaron los acuerdos de Guaymuras⁵. Con la asunción de Porfirio Lobo, Hillary Clinton declaró la vuelta al orden democrático y constitucional (MSNBC, 2010); levantó las restricciones impuestas; y se reanudó la ayuda bilateral proveniente del Departamento de Estado con el objetivo de luchar contra los elevados niveles de corrupción, crimen, narcotráfico, promoviendo reformas socio-económicas para disminuir la

⁴ Esto se diferencia de lo que afirma Zelaya en su carta abierta del 2009: *“la complicidad de los Estados Unidos al conocer previamente, la planificación y ejecución del golpe y guardar silencio”*

⁵ Acuerdo diplomático entre las dos facciones políticas llevado a cabo en el tercer trimestre del 2009. Los representantes del gobierno de Micheletti y los del ex-presidente Manuel Zelaya llegaron a un acuerdo después de varias semanas de diálogo.

pobreza (Meyer, 2009-2010: 13).

De allí, se fueron generando seis políticas que marcan la mutación desde una hipótesis de conflicto doméstica matizada por la agenda del ALBA, hacia una alineada con la del Departamento de Estado americano.

La primera de estas decisiones se presenta el 19 de octubre del 2010, cuando el Ministro de Seguridad hondureño, Oscar Álvarez, públicamente le pide al “*Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs*”, David Johnson, un programa para combatir el narcotráfico en Centroamérica del tipo “*Plan Colombia*”. Según Álvarez, Honduras se vería beneficiado por la ayuda técnica, táctica y económica por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. “*El funcionario hondureño, que no precisó las fechas de sus reuniones con Santos y Rivera, indicó que dialogará con ellos sobre la cooperación bilateral en el combate del narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos, entre otros delitos. (...) Recordó que en la operación participaron Estados Unidos, Panamá, Colombia y Honduras*” (Proceso Digital, 2010).

La segunda política queda en evidencia con la aceptación del Presidente Lobo de crear una fuerza multinacional con el fin de integrar las políticas de seguridad domésticas de los gobiernos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador bajo la asistencia de Estados Unidos. En febrero del 2011 el asistente del Secretario del *Bureau of Narcotics and Law Enforcement*, William Brownfield, anunció la asignación de 1,75 millones de dólares para asistir a las fuerzas policiales hondureñas a combatir el narcotráfico (Brockner, 2011). Asimismo presentó un amplio programa de 200 millones de dólares, el *Central American Regional Security Initiative* (CARSI), para mejorar la seguridad ciudadana desmantelando las redes criminales mediante el entrenamiento de la policía, las Fuerzas Armadas y la creación de instituciones públicas (Office of the Spokesman, 2011).

El 2 de julio del 2012, se da a conocer la tercer política mediante una estrategia ideada por el *Drug Enforcement Administration* llamada “*operación Anvil*”, cuyo objetivo es identificar e interceptar aviones que vienen cargados con drogas desde el sur del continente hacia Honduras. Estados Unidos provee del personal y equipo militar –*agentes especiales que trabajan con la policía hondureña y seis helicópteros militares* (Corcoan & Arce, *Huffington Post* 2012)- para llevar a cabo las operaciones de intercepción e inteligencia. Once

días después, el 13 de julio, un avión fue derribado cerca de los Lirios, en el departamento de Olancho (El Herald, 2012). En los dos primeros meses de la operación, Estados Unidos y la policía hondureña ya habían interceptado cuatro aviones frente a los exiguos siete aviones que interceptaron en los dieciocho meses previos (La Tribuna, 2012).

El 23 de junio de ese mismo año la policía hondureña y los agentes del *DEA* incautaron unos 360 kg de cocaína cerca de Ahuas en el departamento de Gracias a Dios, en el marco de la “*Operación Anvil*” (La Tribuna, 2013). En este tipo de operación, Estados Unidos provee la mayor parte de los recursos, especialmente personal y equipos militares, capacidades de recolección de inteligencia e infraestructura de apoyo (Honduras' Counternarcotics Benefactor, 2012). Estos dos incidentes testimonian una actitud de corte más agresivo en los esfuerzos de interdicción de drogas en Honduras.

En quinto lugar, el 25 de julio del 2012 Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras acordaron construir una base regional antiterrorista para fines del 2012. Parecido al plan *CARSI*, la base contará con apoyo logístico y técnico de Estados Unidos (El Libertador, 2012). Los agentes estadounidenses cooperarán con el monitoreo de los radares para detectar e interceptar embarcaciones clandestinas que transporten drogas ilícitas (La Prensa, 2012).

La sexta política se presenta con el viaje del Vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, en marzo del 2012, a Honduras para mantener una serie de reuniones bilaterales con el recientemente electo presidente Lobo. (*White House Blog*, 2012) *Biden manifestó que “Estados Unidos reconoce la amenaza grave que plantean para Honduras y para toda Centroamérica las organizaciones criminales transnacionales y las pandillas criminales, y estamos ayudando activamente a nuestros socios para hacerle frente a esta amenaza y superarla”* (La Prensa, 2012).

Estas seis acciones ilustran un incremento en la actividad de la policía y las Fuerzas Armadas y muestran una cooperación más estrecha entre Honduras y Estados Unidos. Las medidas aprobadas por el Presidente Lobo ejemplifican la adopción de una agenda guiada por la perspectiva de Estados Unidos para abordar el narcotráfico. Sugieren que Estados Unidos supo aprovechar los sucesos políticos en Honduras para estrechar las relaciones bilaterales dañadas durante el gobierno de Zelaya. En líneas generales, los cambios propiciados por el golpe han beneficiado los

objetivos de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

E. Hipótesis de conflicto: la visión norteamericana

La agenda centroamericana está influenciada por la concepción prohibicionista de Estados Unidos cuyo objetivo es constreñir la oferta de la droga. A través de esta visión se entiende, en parte, por qué Estados Unidos actuó de manera tan comprometida en la resolución del conflicto. Como señalamos anteriormente, la frágil situación hondureña y sus ramificaciones son parte de su hipótesis de conflicto y por ende necesitó, frente al desorden existente, crear un orden que lo beneficiara.

De cara a este escenario hipertrofiado del narcotráfico, Estados Unidos interpretó la necesidad de generar un orden a través de la estabilidad en respuesta a la crisis institucional. Si bien Estados Unidos no participó del golpe, mantuvo una posición reconciliadora en su desenlace (Sucari, 2011: 12-15). Esto se observó con la respuesta menos radical del Departamento de Estado en comparación a los demás países de la región y en su labor en crear los mecanismos necesarios para una resolución democrática del conflicto. Estados Unidos logró consolidar y producir un orden bilateral que se derramó hacia toda la región a través de su activa presencia mediadora entre ambas facciones, buscando el multilateralismo y la cohesión interna.

Esta lógica nos lleva a comprender que los espacios de poder político que ocupan los distintos actores son cruciales para entrever las presentes y futuras acciones en materia de seguridad. Específicamente, la composición de los actores que comenzaron a influenciar la política doméstica del gobierno luego del golpe de Estado –*entre ellos las Fuerzas Armadas, el poder ejecutivo presidido por Lobo, y el Departamento de Estado estadounidense*– definen la composición de la agenda de seguridad.

Por un lado “*el golpe de Estado hizo que afloraran las debilidades del proceso de restitución de la supremacía civil sobre los militares*” (Salomón, 2011: 72), evidenciando la existencia de unas Fuerzas Armadas politizadas que siguieron influenciando la toma de decisiones políticas que promueven este mayor involucramiento de las

fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, Estados Unidos respaldó y promovió una serie de reuniones y negociaciones entre las dos facciones que resultaron en la consolidación de Lobo. Como lo dilucida el cable entre el Departamento de Estado y la Embajada americana en Tegucigalpa, que da cuenta de la negociación entre Porfirio Lobo y el Embajador Hugo Llorens. Estos documentos no sólo demuestran la intervención y participación de Estados Unidos en los asuntos internos de Honduras, *-como es la composición del régimen-* sino también manifiestan su poder tangible y real en la toma de decisiones locales del país centroamericano.

En otras palabras, los actores domésticos que ocuparon los nuevos espacios de poder comenzaron a tomar decisiones afines a la agenda de seguridad regional influenciada por Estados Unidos, ya sea a través de incentivos exógenos o visiones internalizadas, interpretando que las soluciones a los problemas del creciente narcotráfico en los últimos años deben abordarse a través de un papel preponderante de las Fuerzas Armadas y la policía. Ello ha impuesto una agenda híper-militarizada en la región.

F. Continuidades en política exterior

Por medio de este caso podemos constatar que la orientación general de política exterior hacia América Latina no tuvo al menos énfasis diferentes durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama en la *guerra contra las drogas*. No hubo un cambio cuantitativo entre las administraciones de los últimos mandatarios norteamericanos en su mirada hacia la subregión.

Las seis políticas presentadas tienen similitudes con el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, respondiendo a los históricos patrones del “*Grand Strategy*” americano en la región. En este orden es pertinente resaltar que Estados Unidos no considera a todo el continente por igual ya que le otorga mayor jerarquía a ciertas subregiones. Como afirman Roberto Russell y Fabián Calle, Estados Unidos dividió históricamente la región en tres periferias, cediéndole mayor interés estratégico al primer cuadrante entendido como ‘América Latina del Norte’ compuesta por; México,

el Caribe, Centroamérica⁶, Colombia y Venezuela. En esta primera periferia se concentran el 90% de los intereses estadounidenses de toda la región con la existencia de intereses estratégicos permanentes (Russell & Calle, 2007: 19). En el presente contexto, en el cual se cuestiona la unipolaridad estadounidense y el cambio de política exterior que tomó un tono más agresivo post 11/sept/2001, no sorprende que Estados Unidos se esté focalizando en mantener un orden compatible con su agenda de seguridad en Centroamérica. Dadas estas expresiones, la actual política exterior estadounidense hacia la región esgrimida por el Departamento de Estado ha tenido cierta continuidad con la administración Bush en la construcción de una agenda militarizada.

Esta militarización reemergente había desaparecido a principios de los noventa con el fin de la Guerra Fría, el consenso de Washington y la consolidación de las democracias. La presencia de Estados Unidos en la subregión con una política exterior 'más militar', que adoptó la postura de "reforzar las respuestas militares a una variedad de problemas y desafíos" (Deare, 2008: 25-29), ha generado desde el 11 de septiembre de 2001 una participación más activa. Esta mayor actividad en la política exterior se refleja en la elevada influencia del Departamento de Estado en la política de seguridad hondureña. La tendencia de abordar el problema del narcotráfico desde una óptica castrense es evidente en la Honduras de Lobo.

Para ilustrar las similitudes entre las políticas de Estados Unidos en Honduras y el plan Colombia veamos algunos de los componentes de este plan que conducen a una securitización del problema del tráfico de drogas. Si bien comenzó en 1998, se expandió bajo la administración de George W. Bush con la propagación de la *Iniciativa Andina Antidrogas*, donde se propone la expansión de la estrategia de apoyo a la policía, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en la guerra a las drogas en Colombia. Obama y su gabinete, no sólo han mantenido esta postura sino que han profundizado el rol del Comando Sur logrando en el 2009 que Estados Unidos utilice siete bases militares colombianas (Poe, 2009). Asimismo uno puede argüir que la inclusión de Colombia a un área de libre comercio con Washington es una profundización del modelo para desarrollar las condiciones necesarias para combatir al narcotráfico. Obama logró incorporar a Colombia

al tratado de libre comercio en octubre del 2011, "un acuerdo que fue negociado originalmente por la administración Bush, pero que fue trabajado por Obama para satisfacer a los demócratas" (Molinski, 2012).

Del mismo modo, la Iniciativa Mérida, el tratado de seguridad constituido con México y los países centroamericanos, rubricado e ideado por la administración Bush el 30 de junio del 2008 (Clinton H., 2012), fue fortalecida por Obama. Al igual que su antecesor, las propuestas presentadas continuaron centrándose principalmente en proporcionar equipos y capacitación a las fuerzas de seguridad para combatir al tráfico de drogas (Meyer, 2010: 69-71). Queda en evidencia que las políticas ilustradas forman parte de la expansión de esta iniciativa hacia Honduras.

El salto hacia una mayor autonomía de las Fuerzas Armadas en la subregión bajo el liderazgo del Comando Sur, sigue consolidándose. La mutación de la agenda de seguridad hondureña hacia una agenda que securitiza el orden público dominado por la actividad militar, traza sus paralelos con esquemas anteriores. Ambos mandatarios prosiguieron enfrentar al narcotráfico utilizando la misma lógica, al consolidar un orden a través de la primacía existente en la región. En el largo plazo se demuestra que el golpe de Estado del 2009 ha beneficiado a la agenda norteamericana en la lucha contra el narcotráfico.

G. Comentario final

En la última década, la cuestión militar ha reaparecido en la región -especialmente en la 'América Latina del Norte'- en donde no sólo ha acrecentado las bases militares, sino que ha lanzado programas cuyas estrategias involucran una mayor participación muscular para combatir las amenazas que atentan contra la estabilidad y seguridad de la región. Con ayuda económica y logística para implementar políticas antinarcóticos se promueven modificaciones estratégicas en la agenda de seguridad centroamericana, traduciéndose en una extensión de la propia agenda de Washington hacia la región. El estudio del caso hondureño nos ilustra como la reconfiguración del orden interno logró posicionar una visión que contempla la securitización del orden público para abordar la agenda contra las drogas.

⁶ Entre ellos Honduras

Es importante destacar que la administración de Barack Obama promueve una agenda de seguridad en el país hondureño, impulsando políticas que responden a la misma lógica militarizada que la anterior administración de George W. Bush. En ambos casos, la lucha contra las drogas no ha obtenido los resultados esperados ya que la importancia de una agenda norteamericana cargada de otras prioridades la alejó de América Latina privándola de destinar todos los recursos para administrar el conflicto.

Bibliografía

- Beittel, J. S. (2011). *Mexico's Drug Trafficking Organizations: Source and Scope of the Rising Violence*. Congressional Research Service, D.C. <http://fpc.state.gov/documents/organization/1555587.pdf>
- Briscoe, I. (2003). La Unión Europea y el tráfico de drogas proveniente de los Andes. In e. d. Zorzal (Ed.), *La Guerra contra las drogas en el mundo andino. Hacia un cambio de paradigma* (p. 297). Buenos Aires.
- Brockner, E. (2011). *Brockner, Eliot, "Central American Countries Join Forces Against Organized Crime*. International Relations and Security Network, Zurich.
- Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2012, marzo 7). *Country Reports - Honduras through Mexico*. Extraído de U.S. Department of State: <http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184100.htm>
- Cable: GOH Says Farc Not A Terrorist Group, Attends Alba Summit: Payoff For Petrocaribe?, 08TEGUCIGALPA89 (Embajada de Tegucigalpa enero 28, 2008).
- Cable: President Jose Manuel Zelaya Rosales: Personal Reflections of Ambassador Ford, 08TEGUCIGALPA459 (Embajada de Tegucigalpa Mayo 15, 2008).
- Cable: "Charges Filed Against Military For Flying Zelaya Out Of Honduras". No: 10TEGUCIGALPA16. Embajada de Tegucigalpa 8 de enero, 2010).
- Cable: Ambassador and President Lobo Discuss the Need to Appoint New Military High Command, 10TEGUCIGALPA143, (Embajada de Tegucigalpa 17 de febrero, 2010).
- Caulkins, J., Reuter, P., & Igu, M. (2005). "How Goes the "War on Drugs"? An Assessment of U.S. Drug Problems and Policy". Retrieved from RAND corporation: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2005/RAND_OP121.pdf
- Clinton says U.S. aid to resume to Honduras. (2010, abril 3). *MSNBC*.
- Clinton, H. R. (2012, mayo 29). *La Iniciativa Mérida: La ampliación de la asociación entre Estados Unidos y México* Extraído de Departamento de Estado de EEUU, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental .
- Corcoan, K., & Arce , A. (2012, julio 25). *Operation Anvil: U.S. Drug Strategy Led To Deadly Honduras Raid*. Extraídos de Hufftington Post: http://www.huffingtonpost.com/2012/06/25/operation-anvil-us-drug-s_n_1623658.html
- Deare, C. (2008). La militarización en America Latina y el papel de Estados Unidos. *Foreign Affairs en Español*, 8 (3), 25-28.
- El Herald. (2012, julio 3). *Cae "narcoavioneta" con 600 kilos de cocaína en Olancho*, al oriente de Honduras. *El Herald*, <http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Cae-narcoavioneta-con-600-kilos-de-cocaína-en-Olancho-al-oriente-de-Honduras>.
- El Libertador. (2012, julio 28). Instalarán otra base militar de Estados Unidos en Honduras. *El Libertador* , <http://www.ellibertador.hn/?q=article/instalar-án-otra-base-militar-de-estados-unidos-en-honduras>.
- Embajda de EEUU en Tegucigalpa. *Ambassador and president Lobo Discuss the need to appoint new military high command*. (Departamento de Estado EEUU. Nº 10TEGUCIGALPA143).
- *Honduras' Counternarcotics Benefactor*. (2012, julio 25). Retrieved from Stratfor: http://www.huffingtonpost.com/2012/06/25/operation-anvil-us-drug-s_n_1623658.html
- Inestroza, C. H. (2009, julio 2). Cometimos un delito al sacar a Zelaya pero había que hacerlo. (J. L. Dada, Interviewer) San Salvador, Honduras: El Faro.
- La Prensa. (2012). Biden: "Podemos crear una Honduras más segura y próspera". *La Prensa.hn* , <http://www.laprensa.hn/csp/mediapool/sites/LaPrensa/Honduras/Apertura/story.csp?cid=329123&sid=267&fid=98>.
- La Prensa. (2012, septiembre 20). Un mes cumplen narcos con los cielos abiertos en Honduras. *La Prensa.hn*, http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Un-mes-cumplen-narcos-con-los-cielos-abiertos-en-Honduras#.Ug_juBa4Qts.

- La Tribuna. (2012, junio 25). ¡Se pelean por recoger coca! *La Tribuna*, <http://www.latribuna.hn/2012/06/25/se-pelean-por-recoger-coca/>.
- La Tribuna. (2013, julio 25). Consejo contra el Narcotráfico alista estrategia por consumo de drogas. *La Tribuna*, <http://www.latribuna.hn/2013/07/25/consejo-contra-el-narcotrafico-alista-estrategia-por-consumo-de-drogas/>.
- Linz, J. (1989). *Transiciones a la democracia*. Boulder, Col.: Lynne Rienner Publishers.
- Linz, Juan J. (1990) "Perils of Presidentialism". *Journal of Democracy*, 1990, vol .1 No 1, (pp. 51-69).
- Manaut, B., & Diamint, R. (2010). La cuestión militar y el golpe de Estado en Honduras como desafío a la democracia y al sistema interamericano. *www.nuso.org* (ISSN: 0251-3552), 148.
- Meyer, J. P. (2009-2010). *Honduran Political Crisis*. Congressional Research Service, Washington D.C.
- Meyer, M. (2010). Obama y la Iniciativa Mérida: ¿el inicio de un cambio o continuidad de la fallida guerra contra las drogas. In R. B. (ed.), *Crimen Organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos. Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia* (pp. 69-75). D.F., México: (CASEDE).
- Meza, V. (2010, octubre 15). El golpe de las élites. *Centro de Documentación de Honduras*, 1.
- Molinski, D. (2012, mayo 15). *Free-Trade Deal Begins Between Colombia, U.S.* Retrieved from The Wall Street Journal: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304371504577406632596723786.html>
- Office of the Spokesman. (2011). Letter of Agreement Signed Between United States and Honduras for CARSI Funds. *Media Note, 10 de febrero*. Wahington, D.C.
- Poe, A. (2009, noviembre 4). *U.S.-Colombia Defense Cooperation Agreement*. Retrieved from Just the Facts: A civilian guide to U.S. defense and security assistance to Latin America and the Caribbean: <http://justf.org/blog/2009/11/04/us-colombia-defense-cooperation-agreement>
- Proceso Digital. (2010, octubre 13). Oscar Álvarez viaja a Colombia para reunión con presidente Santos. *Proceso Digital*, <http://www.proceso.hn/2010/10/13/Nacionales/Oscar.Alvarez.viaja/29150.html>.
- Russell, R., & Calle, F. (2007). *La 'periferia turbulenta' como factor de la expansión de los intereses de seguridad de Estados Unidos en América Latina*. Universidad Di Tella con el apoyo de la Fundación Ford, Bs. As.
- Salomón, L. (2011). Anexo 3. El sistema de defensa en Honduras. In *Honduras: Democracia, conducción civil y agenda de reformas en el sector de defensa* (pp. 69-73). Tegucigalpa, Honduras: Centro de Documentación de Honduras.
- Stepan, A. (1988). Cono sur: un análisis comparado. In A. Stepan, *Repensando a los militares en política* (Cap. 7). Buenos Aires, Argentina: Planeta.
- Sucari, E. (2011). Fuerzas Armadas en Venezuela y Honduras ¿Autonomía o protección norteamericana? *Cuadernos de política exterior Argentina* (106).
- Tally M. W. (1998) *Drug Policy in the Wake of the June 1998 Drug Summit*, 25 Brook. J. Int'l L. (p. 750-790).
- The White House Blog. (2012, marzo 7). Vice President Biden Travels to México and Honduras. D.C.
- Tokatlian, J. G. (2003). Introducción: Hacia una larga guerra contras las drogas. In *La guerra contra las drogas en el mundo andino* (p. 26). Buenos Aires, Argentina: Editorial del Zorzal.
- Tokatlian, J. G. (2010). *Latin America's Military Factor*. Project Syndicate. Nueva York,: Columbia University.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

www.cedoh.org

*Centro de Documentación de Honduras
Apartado Postal 1882
Tegucigalpa, Honduras*

*Teléfono: +504 2232 3265
Fax: +504 2232 3708
correo: info@cedoh.org
www.cedoh.org*